

Las urnas abren la puerta a una nueva era de reformas en España

► Apuntalar el crecimiento y continuar rebajando el déficit y la deuda se posicionan como las prioridades económicas para el Gobierno entrante

S. ALCELAY / M. VELOSO / M. CUESTA MADRID

Los españoles acudirán a votar el próximo 28 de abril a las terceras elecciones generales celebradas en cuatro años, después de haber pasado ya por unos comicios autonómicos catalanes y andaluces y una moción de censura. Y con la mirada puesta en la cita autonómica, municipal y europea tan solo un mes después. Un escenario muy alejado de la certidumbre tan preciada por los inversores que ha sumido a España en una suerte de parálisis regulatoria.

Por lo pronto, 2019 será un «año perdido» más en el que las instituciones estarán o en funciones o arrancando tras el verano. Dando este coste por perdido, empresarios y economistas ven en la cita del mes de abril la posibilidad de poner fin a un periodo de inacción económica y de abrir la puerta a un nuevo escenario en que las reformas estructurales vuelvan a tener cabida. Así lo creen los expertos consultados por ABC que, aunque destacan el alto riesgo de que el resultado ofrezca una aritmética complicada, recuerdan la urgencia de reactivar las reformas que han quedado paralizadas para consolidar el crecimiento diferencial del que ahora disfruta España frente a sus socios europeos.

«Se necesita retomar cuanto antes una agenda reformista que hace años está abandonada», reclama el vicepresidente de la patronal madrileña (CEIM), Francisco Aranda. Los empresarios indican en este sentido que esa agenda debe incluir medidas laborales y fiscales y de reducción de los costes empresariales, entre ellos los energéticos, para que puedan potenciar el crecimiento y la creación de empleo.

Reforma laboral de 2012

Por ejemplo, y frente a los planes de la contrarreforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, las patronales plantean profundizar en la reforma de 2012 de la ministra Fátima Báñez, no solo en materia de flexibilidad laboral, en lo que ya se avanzó, sino aho-

ra también en cuestiones de seguridad y de mejora de las políticas activas de empleo, y por tanto en un modelo integral de flexiseguridad.

El Ejecutivo socialista, recuerdan desde el empresariado, llegó a saltarse el diálogo social ante su debilidad parlamentaria, sufriendo el salario mínimo por encima del acuerdo en firme entre los agentes sociales y el Gobierno de Rajoy. Esta concesión de Sánchez a Podemos supuso romper el diálogo social en una materia que siempre ha sido objeto de acuerdo.

Además, los empresarios llaman la atención sobre el incremento de las cotizaciones sociales y el freno que puede suponer para el empleo. «No puede ser que en el país con la tasa de paro más alta después de Grecia las cotizaciones sean de las más elevadas de Europa», dice Aranda.

En la misma línea apunta Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA: «Empresas y autónomos necesitan estabilidad y certidumbre para generar empleo», insiste. En su opinión, «queda mucho trabajo por delante. Son varias las amenazas que hay sobre nuestra economía que hay que afrontar y muchas las reformas que quedan por hacer. Algunas, dolorosas, como la de las pensiones».

Además, hay que reformar el mercado de trabajo porque no se ha hecho nada desde el año 2012, acometer un ajuste presupuestario para cumplir con el déficit y seguir tomando medidas para favorecer la actividad de los autónomos.

Y para ello se necesita un Gobierno fuerte, que sea capaz de consensuar y pactar, de recuperar el espíritu de la Transición. Es necesario un Ejecutivo serio, que se faje y que tenga mayoría en el Parlamento. Es evidente que el Gobierno que salga de las urnas no lo va a tener fácil. Tendrá que cumplir con Bruselas y afrontar esas reformas que es-

97%
del PIB

La deuda de las administraciones públicas alcanzó los 1,17 billones en 2018

0,7%
Economía

Es lo que creció España en el último trimestre, frente al 0,2% de la Eurozona



tán bloqueadas, además de solucionar la crisis de Cataluña», concluye Amor.

Riesgos externos

Lo cierto es que el entorno internacional comienza a complicarse. A los riesgos derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la posibilidad creciente de un Brexit duro, se une también la amenaza velada de «japonización» de la economía europea, con altos niveles de deuda en buena parte de las naciones y crecimientos estancados. La semana pasada se conocieron los datos de crecimiento del PIB de la Eurozona en el último trimestre de 2018, que se saldaron con un tímido alza del 0,2%, el estancamiento de Alemania, la entrada en recesión de Italia y el buen pulso de España con un alza del 0,7%.

«El principal reto económico para el próximo Gobierno va a ser articular unos Presupuestos del Estado admisibles por Bruselas, pero que apoyen el crecimiento potencial del país, porque España necesita crecer para poder seguir afrontando el pago de la deuda», apunta Emilio Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Afi.

Las principales cuestiones

Pensiones

El «baby boom» más cerca y sin mecanismos de ajuste

Es la reforma más ambiciosa y quizá la más importante a la que se enfrenta España. El Pacto de Toledo lleva casi dos años de trabajos y no ha logrado avanzar en una sola medida que permita aliviar el déficit que pesa sobre el sistema de pensiones, de 19.000 millones, y la carga de la deuda, que este año estará próxima a los 65.000 millones. En 2013, el Go-

bierno de Rajoy decidió, previa consulta a un grupo de expertos, tomar la iniciativa y afrontar una reforma en solitario. Puso en marcha un índice de revalorización que limitó al 0,25% las subidas de las nóminas mientras el sistema estuviera en crisis y diseñó un factor de sostenibilidad, que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y, por tanto, la recortaría. Dos medidas de contención del

gasto desactivadas en 2018 por el acuerdo entre el PP y el PNV. Por ese pacto, las pensiones subieron igual que el IPC en 2018. Este ejercicio Sánchez ha hecho lo mismo y, además, compensará a los jubilados por la desviación de los precios. Las pensiones llevan dos años con subidas del 1,6% y del 3% las mínimas.

El factor se ha pospuesto a 2023, año en el que comenzará a jubilarse la generación del «baby boom». Un «ejército» que comenzó a trabajar muy pronto y que cuenta, por tanto, con carreras de cotización largas. En 2042 se espera que el número de pensionistas llegue a 15 millones, frente a los 9,7 actuales.



Energía

Una reforma para abaratar el coste eléctrico a la industria

Los elevados precios de la luz suponen históricamente un fuerte coste energético para las empresas, principalmente para la industria, lo que hace perder competitividad al sector industrial español. Los cierres de plantas y despidos anunciados en los últimos meses por grandes compañías como Alcoa y Vestas han encendido las alarmas.

El Gobierno de Sánchez, con el fin de parar estos ajustes empresariales, anunció medidas para reducir los costes energéticos a las empresas con mayor consumo eléctrico a cambio de mantener la actividad y el empleo durante cierto tiempo. La convocatoria de elecciones hará decaer previsiblemente esta reforma, por lo que el futuro Gobierno tendrá que volver a abordar el asunto de los costes energéticos, una reivindicación histórica de la industria y que está detrás del cierre de muchas fábricas.

Fiscalidad y cuentas públicas

Reducir la deuda y potenciar el crecimiento económico

Los economistas lamentan que España haya perdido un lustro de crecimiento económico y política monetaria favorable para reducir su nivel de deuda pública, todavía en torno al 97% del PIB, a niveles más sostenibles. Tanto el Gobierno del PP y el Ejecutivo del PSOE reconocían que esto era una tarea urgente a las puertas de una normalización de la política del BCE, pues un incremento de los tipos de interés encarecerá la factura que paga España en intereses por esa ingente cantidad de deuda acumulada. Más allá de los posibles ajus-

tes de ingresos y gastos, una vía para reducirla es alcanzar un mayor crecimiento. En este sentido, los empresarios instan a adoptar medidas fiscales que favorezcan ese crecimiento y el empleo. Esa reforma pasa, según las empresas, no por elevar los tipos impositivos o crear nuevas figuras, sino por simplificar la fiscalidad y, por ejemplo, reducir las cargas para los empleadores, ampliar las bases imponibles del IRPF para equiparar los tipos marginales a la media europea y de la OCDE y suprimir algunas figuras.



Reforma laboral

Mayor flexibilidad y medidas para frenar la temporalidad

Sánchez repitió como un mantra que derogaría la reforma laboral, pero la debilidad parlamentaria le ha impedido hacerlo. El diálogo social tampoco ha dado frutos esperados: empresarios y sindicatos han sido incapaces de entenderse con el Gobierno y sacar adelante ni una sola medida que permita la modernización de las relaciones laborales que vuelven a reclamar las empresas en España y los organismos internacionales. Desde 2012 no se han producido cambios laborales. La reforma de aquel año llegó en un momento en el que la economía

destruía empleos a ritmos superiores del 5% y con una tasa de paro por encima del 26%. España ganó competitividad gracias a las rebajas salariales y a las condiciones laborales más flexibles, dos pilares de aquella reforma que hoy, según los analistas, es necesario modernizar. Desde 2014 la economía crea empleo, pero más del 90% es temporal, lo que, unido a que los sueldos se resisten a subir, es una amenaza para las pensiones. Y la contratación sigue siendo farragosa para las empresas, que hoy pagan más impuestos al empleo.



«La coyuntura del país es favorable, tanto en términos de PIB como de empleo y de tipos de interés, por lo que debería aprovecharse para reducir de manera más rápida la deuda pública y tomar las medidas necesarias para abordar la sostenibilidad financiera de la seguridad social», explica Ontiveros. Eso sí, advierte que «poner en marcha ajustes severos sería muy preocupante porque 2019 va a ser un año muy complejo económicamente hablando para las grandes potencias internacionales y a España nos acabará llegando el enfriamiento. Hay que tener cuidado y centrarse en apuntalar el crecimiento».

Más arrojado se muestra el profesor del IE Business School Rafael Pampillón: «Hay mucho por hacer y mucho por deshacer», dice, señalando los posibles efectos perniciosos sobre el empleo de la subida del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como sobre las cuentas públicas de la contrarreforma de las pensiones de los últimos años. Ontiveros, sin embargo, se muestra escéptico sobre una posible vuelta atrás de estas medidas: «Son decisiones con demasiado coste político para una situación como la actual», reflexiona. «Como fuere, urgen medidas en materia tributaria que apoyen el crecimiento y la reducción de la deuda y el déficit público», concluye Pampillón.

